

Arica, veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro

**VISTO:**

**DIEGO ALVAREZ TRIGO**, Defensor Penal Público, en representación del sentenciado **Diego Hernán Valdés San Martín**, en causa RUC **2300777665-9, RIT 35-2024**, del Tribunal De Juicio Oral en lo Penal de Arica, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada por dicho tribunal, de 17 de Abril del año en curso, que **condenó a su representado** a la pena de de DOCE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad a título de autor ejecutor del artículo 15 N° 1 del Código Penal, en un delito de homicidio simple en contra de Jeremy Santamaría Jamett, hecho perpetrado el día 15 de febrero de 2022 en la ciudad de Arica y a una condena de CUATRO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el comiso de los efectos del delito, por su responsabilidad a título de autor ejecutor en un delito de porte de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 13 en relación con el artículo 3 de la Ley 17.798 sobre control de armas hecho perpetrado el día 18 de febrero de 2022 en la ciudad de Arica.

Se procedió a la vista del recurso el día 04 de junio del año en curso.

Concluida esa vista, se fijó esta audiencia para la lectura del fallo.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la recurrente funda su arbitrio, de manera principal, en la causal contemplada en el artículo 373 letra b), esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en este caso respecto del reconocimiento de la atenuante del art. 11 N°9 en relación al art. 68 bis del código penal y, en forma subsidiaria, en la la contemplada en el art. 373 letra b), en relación a los art. 63 y art. 69 del código penal.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

**SEGUNDO:** En cuanto a la causal principal, sostiene que esta concurre al haber rechazado el tribunal su petición de tener la atenuante establecida en el art. 11 N° 9 como muy calificada en atención a lo dispuesto en el artículo 68 bis del código penal, respecto del delito de homicidio simple, la que fue rechazada por el sentenciador conforme razonó en el considerando Decimoséptimo, el que transcribe, luego de lo cual argumenta que según Mario Garrido Montt esta posibilidad se presenta cuando en el juicio hay una circunstancia atenuante y ninguna agravante...” *El Tribunal para hacerlo deberá apreciar valorativamente la atenuante junto con los antecedentes fácticos del hecho.*” (Garrido Montt, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, pag. 334.)

Señala que en el presente caso se advirtió una particular y extraordinaria actitud asumida por el acusado, y que a diferencia de lo indicado por el sentenciador

si adquiere este elemento adicional que permite estimarla como muy calificada:

Así, en cuanto a esta particular y extraordinario actitud de su representado constan en lo fundamentado por el tribunal, los asertos del testigo Rafael Alberto Herrera Bustamante y por último la declaración de su representado, indicando en el sentenciador respecto del delito de homicidio : *“y que incluso la dinámica es reconocida por el propio acusado al momento de mencionar que producto de la ingesta de alcohol y de drogas pensando que le querían quitar el arma procedió a disparar en contra de la víctima a quien la vio demasiado cerca de él. En consecuencia, si bien se trata de una información absolutamente periférica que entrega el funcionario policial no se puede soslayar que dichos antecedentes son coincidentes con la declaración que entrega el propio encartado en lo que coincide con el sustrato de la acusación y que incluso permite ilustrar la hipótesis comisiva.*

*Luego, el recurrente, sin más, indica el nombre de Rafael Herrera Bustamante, y transcribe parcialmente lo que aparentemente sería una transcripción más literal de los dichos aquel testigo en un párrafo de cuatro páginas incluido en el extenso considerando decimocuarto de la sentencia, en que ese en que se contienen razonamientos de los jueces.*



Luego, el recurrente, indica que: “En cuanto al delito de porte de arma de fuego: *“y esto hizo que la policía lo fiscalizará. A lo ya dicho se suma que el acusado al momento de enfrentar los actos de instrucción no opuso resistencia y posteriormente entregó las evidencias que llevaba en su poder.”*, sin señalar tampoco de que parte de la extensa sentencia transcribe aquel pasaje.

Sostiene que respecto de su representado se dan todos los requisitos para considerar muy calificada la atenuante desde el momento que renuncia a su derecho a guardar silencio y con los datos por él aportados se logró su condena, que de haber controvertido el hecho de su participación en el delito de homicidio simple, con la prueba de cargo del ente persecutor, claramente no habría tenido el resultado esperado, siendo entonces un elemento que otorga un plus superior a su declaración.

A continuación, transcribe la declaración del acusado conforme lo consignado en el considerando Quinto de la sentencia.

Luego, el recurrente transcribe que lo señala la sentencia al respecto, a continuación de lo cual indica que la actitud del acusado no solo ha de estimarse de la entidad descrita en el 11 N°9 del Código Penal, esto es, colaborando sustancialmente en el establecimiento de los hechos, sino que reúne un estándar superior que permite considerar a la misma como muy calificada. En tal sentido, el reconocimiento de éste no solo permitió establecer la dinámica de su participación en el delito como en la etapa de Juicio Oral en donde renunció a su derecho a guardar silencio pudiendo esclarecer los hechos. De este modo, su versión hizo desaparecer la habitual y compleja controversia en este tipo de juicio – ocurrencia del hecho/ participación-, agilizar su propia detención y todo lo que lleva esta situación y por otro lado en el juicio oral abreviar la rendición de la prueba de cargo ofrecida, obteniendo finalmente un veredicto.

Conforme a los argumentos esgrimidos el sentenciador, al no aplicar la aminorante como muy calificada como lo contempla el art. 68 bis del Código Penal, influye respecto de lo dispositivo de la sentencia, toda vez que de reconocerse la colaboración muy calificada, pudo haber estado en la situación de rebajar la pena a lo menos en un grado, pudiendo condenar a una pena de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

presidio mayor en su grado mínimo, condenando a su representado a penas superiores a las que legalmente le correspondían, por lo que pide se proceda a dictar sentencia rebajando la pena en un grado y se aplique concretamente la de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de homicidio simple y la de cuatro años de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte de arma de fuego prohibida.

**TERCERO:** Que en cuanto a la causal de nulidad invocada de manera principal, establecida en el artículo 373 letra b) del Código Penal, esto es, la errónea aplicación del Derecho que hizo el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y que influyó en lo dispositivo del fallo, específicamente del artículo 11 N° 9 del Código Penal, referido a la atenuante de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y a su vez, relacionado con el artículo 68 bis del mismo texto legal, no hay que confundir las atenuantes muy calificadas con las atenuantes comunes o especiales de efecto extraordinario. Las atenuantes muy calificadas son atenuantes comunes y de efecto normal, pero a las que el tribunal les confiere un efecto extraordinario en un caso concreto. En cambio, las atenuantes comunes o especiales de efecto extraordinario y las privilegiadas gozan de una eficacia excepcional, porque la ley expresamente se la atribuye para todos los casos concretos en los que concurren.

En cuanto a los fundamentos de la calificación también se ha dicho que “En la medida en que no existe una vinculación normativa para fundar la calificación, ella debe encontrar asidero en los hechos, es decir, se debe atender “a las particularidades de la situación fáctica sobre la cual se construye” (Cury 11, 394) o “a la calidad de los hechos” que constituyen las correspondientes atenuantes (Etcheberry II, 184. cfr. SCS 10.01.1994, en RDJ 1994, la que sostiene “que para otorgar el carácter de muy calificada a una atenuante debe estar establecida con mayores antecedentes de los que ordinariamente se tienen presentes para configurarla, los cuales por su entidad e importancia lleven al tribunal al convencimiento de atribuirle dicha ponderación”). (Op. Cit. Pág. 372).

Por consiguiente, para que pueda estimarse que una circunstancia modificatoria atenuante como la del artículo 11 N° 9 del Código Penal sea



estimada que concurre como muy calificada en un caso concreto, es menester que además de los elementos característicos propios que constituyen el sustrato fáctico que configura la citada circunstancia –en cuanto mera atenuante de responsabilidad- se requiere del establecimiento de hechos que constituyan un plus, un extra, por sobre el señalado sustrato fáctico y que en base a ellos sea racionalmente justificable aquilatar a la referida minorante como concurrente en carácter de muy calificada.

**CUARTO :** En el caso concreto, el hecho de entregar información respecto de la participación que le correspondió se encuentra debidamente valorada en el considerando decimosexto de la sentencia impugnada, explicando de manera circunstanciada las motivaciones para reconocer la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, pero desechando en el considerando Decimoséptimo la solicitud de la defensa en orden a calificarla en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, “toda vez que si bien sus dichos tienen la entidad necesaria de considerar sus asertos como un complemento de las demás pesquisas de instrucción, ello únicamente tiene su correlato con la atenuante en análisis pura y simplemente, sin evidenciar una valoración extraordinaria que no sea la ya mencionada en el considerando precedente. Recordemos que en el presente caso existían otras declaraciones las que en gran mayoría fueron recopiladas por la policía de investigaciones de Chile, siendo la declaración del acusado un complemento con las restantes declaraciones que se presentaron a juicio”, siendo útil recordar lo razonado por el tribunal en el considerando **Duodécimo en que para arribar a la decisión condenatoria destaca en su segundo párrafo lo que sería luego, desarrollado en extenso, señalando que:** *“En efecto, como elementos centrales de la decisión condenatoria se contó con los testimonios precisos, categóricos y sin margen de error de los funcionarios policiales, **Rafael Alberto Herrera Bustamante y Adolfo Ignacio Espina Muñoz** que trabajaron de manera concienzuda el sitio suceso y que recolectaron declaraciones de los testigos presenciales que se encontraron en el lugar, amén de hacer consultas tanto en redes sociales y hacer las respectivas corroboraciones y reconocimientos y encuadre de la información, con los*



*deponentes que se encontraban en el sitio suceso y que dieron cuenta de la acción desplegada por el encartado, los que indicaron de manera única, exclusiva y excluyente que el autor de los disparos fue el imputado Diego Hernán Valdés San Martín, apodado el indio Loaiza, utilizando para tal efecto un arma de fuego lo que trajo como causa de muerte un shock hipovolémico”, no debiendo desatenderse por lo demás, que el acusado fue detenido en virtud de una orden de detención emanada del Juzgado de garantía de esta ciudad obtenida con los antecedentes que habían sido recabados y que al momento de la detención, el imputado portaba el arma con que efectuó los disparos y con la que se causó la muerte de la víctima, conforme fue acreditado además con las pericias correspondientes, por lo que no se advierte el yerro jurídico que el recurso atribuye a los sentenciadores, por lo que la causal principal de nulidad será desestimada.*

**QUINTO:** Que como segundo motivo de nulidad, invocado en forma subsidiaria, se asiló en la misma causal que la alegada de manera principal, esto es, en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, sosteniendo que se infringieron los artículo 63 y 69 del Código Penal y “el delito de Homicidio simple y el de porte de arma de fuego”

Sostiene que se infringe el principio del non bis in ídem, del artículo 63 del Código Penal, pues al momento de determinar el quantum de la pena, el tribunal no puede volver a valorar aspectos ajenos a la extensión del mal causado, conforme el artículo 69 el mismo código.

Luego reproduce el razonamiento de los sentenciadores respecto de la determinación de la pena, transcribiendo el considerando decimoctavo, para a continuación sostener que tal razonamiento no se ajusta a derecho por las siguientes consideraciones:

“a) ATENUANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL: tal como fue declarado en el propio fallo de U.S., a su representado le beneficia la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

b) AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL no concurre.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

c) De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

d) CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS: tal y como señala S.S en el fallo invocado, existe solo una circunstancia minorante.

e) NON BIS IN IDEM: En el fallo señala en su considerando Décimo octavo, respecto del delito de homicidio simple *“...se ponderará la mayor extensión del mal causado, toda vez que si bien, la muerte de la víctima es parte del tipo homicidio, no se puede soslayar que el inculcado atacó el bien jurídico máspreciado de nuestro ordenamiento jurídico – social que es la vida, ejecutando la acción homicida prevalido de medios comisivos altamente destructivos que demuestran un mayor riesgo en la conducta, efectivamente, el encartado disparó un arma de fuego en contra de la víctima y en contra de los terceros que se encontraban en el lugar vislumbrando en consecuencia un desprecio absoluto por la vida y la integridad física y psíquica de las personas que se encontraban en el interior de ese inmueble, percutando el arma varias veces en un espacio reducido consistente en un departamento...”*

*Respecto del delito de porte de arma de fuego prohibida “...Dentro del marco penal resultante se ponderará la mayor extensión del mal causado toda vez que el bien jurídico protegido es el orden público y si bien se trata de una figura de peligro abstracto, no se puede preterir que la conducta desplegada por el acusado implicó un mayor desvalor en la misma, toda vez que el encartado se trasladó por distintas calles de la ciudad portando consigo un arma apta para el disparo, la que por sus características tenía una mayor capacidad de destrucción y letalidad la que podía operar en modalidad automática o semi automática según la adaptación que ella tenía en el disparador del armamento tal como lo mencionaron los testigos del ministerio público y peritos...”*

Así las cosas, considerar que la extensión del mal causado se incrementa por estos factores sería sancionar reiteradamente a su representado por lo mismo, constituyendo así una clara infracción del principio non bis in idem, dispuesto en



los artículos 1 del Código Procesal Penal y 63 del Código Penal. Asimismo, este principio está consagrado en el artículo 14 N°7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 N°4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Luego cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa ROL 3026-2019-ref. RUC 1801019590-6, RIT O-316-2019.

Sostiene que el yerro que denuncia influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo al aplicar la penas en el quantum que determinó de doce años de presidio mayor en su grado medio, como autor de Homicidio simple y de cuatro años como autor del delito de porte de arma de fuego prohibida, en relación con el art. 68 del mismo cuerpo normativo, en virtud que no se fundamentó una mayor extensión del mal causado..”, por lo que existió una errónea aplicación de la ley penal, y de no haber incurrido en el vicio de nulidad, había podido fijar una sanción proporcional al hecho y participación, y por tanto menor que la impuesta en la sentencia.

Pide anular sólo la sentencia; y dictar una de reemplazo por la cual se condena a su representado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple, y de 3 años y un día por el delito de porte de arma de fuego.

**SEXTO:** Que nuestro sistema recursivo establece como requisito de procedencia de la declaración de nulidad de la sentencia la sustancialidad del vicio, conforme se consagra en el artículo 375 del Código Procesal Penal, al establecer “Defectos no esenciales. No causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva....”.

De la lectura de la sentencia se advierte que los sentenciadores reconocieron una sola atenuante de responsabilidad penal (la del artículo 11 N°9 del Código Penal), y al regular la pena del delito de homicidio se ubicaron dentro de la mitad inferior de la misma, y en cuanto al delito sancionado en la ley 17.798 se posicionaron en el grado mínimo asignado a aquel, quedando el marco legal punitivo reducido a los previstos en la ley, y luego, en ambos casos, lo concretaron dentro del minimun que correspondía a cada uno, por lo que la no regulación de la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

pena requerida por el recurrente no puede fundar un vicio de nulidad, pues supone confundir la errónea aplicación de la ley con la diversa valoración que los jueces asignen a los elementos que llevan a su determinación.

En efecto, no resulta plausible confundir los márgenes de discrecionalidad reglada propios de la determinación de las penas con un error de derecho, pues el legislador entrega márgenes y referencias para la imposición de las penas, pero no resulta procedente pretender disfrazar de error a la legítima y fundada aplicación de una pena prevista en la ley para el caso concreto, máxime si los jueces atendieron también a la extensión del mal causado, no pudiendo sus razonamientos considerarse como una infracción al principio de non bis in idem, pues en cada caso fue debidamente razonado y justificado, más allá de que los argumentos no sean de la conveniencia del recurrente.

**SEPTIMO:** Que en cuanto al delito de homicidio, si bien los sentenciadores se refieren al bien jurídico protegido, no puede desconocerse que destacaron del hecho constitutivo del delito las circunstancias de comisión y como éstas pusieron en riesgo la vida de otras personas que se encontraban en el sitio del suceso, en particular aquellos descritos en el párrafo primero del considerando Decimoctavo: “...ejecutando la acción homicida prevalido de medios comisivos altamente destructivos que demuestran un mayor riesgo en la conducta, efectivamente, el encartado disparó un arma de fuego en contra de la víctima y en contra de los terceros que se encontraban en el lugar vislumbrando en consecuencia un desprecio absoluto por la vida y la integridad física y psíquica de las personas que se encontraban en el interior de ese inmueble, percutando el arma varias veces en un espacio reducido consistente en un departamento” lo que constituye un mal adicional al simple hecho del resultado muerte de la víctima.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que la sentencia es un todo, no es posible soslayar que en esta causa se dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral, la que fue acogida conforme los razonamientos vertidos por los sentenciadores en el considerando décimo quinto, refiriéndose a los resultados dañosos para la madre de la víctima, por lo que el mal causado no queda limitado a la pérdida de la vida del ofendido, destacándose en dicho



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

razonamiento el relato de su progenitora, a saber: “.... lo que sumado a las fotografías del cadáver del occiso en el que se vislumbran los impactos de bala y la muerte violenta que este habría tenido a una escasa edad, sumado al reiterado discurso de la víctima y que resulta absolutamente atendible al mencionar que para ella fue impactante ver a su hijo fallecido, indicando con voz llorosa que se recuerda todos los días de la posición en la que lo encontró en el interior del departamento, con impactos de bala en su cuerpo, lo que por cierto es coincidente con las imágenes que fueron exhibidas por el ministerio público y que fueron explicadas por los testigos del persecutor penal lo que, según dichos de MIJA hasta el día de hoy no puede olvidar lo que hace presumir fundadamente que el fallecido era parte de su grupo familiar y que existían lazos de profundo afecto y cariño con la testigo de iniciales MIJA, conclusión absolutamente elemental toda vez que ésta última era la madre de Jeremy Santa María. A lo ya dicho se suma que la testigo mencionó sin margen de error en una narrativa libre y espontánea que actualmente padecía de una profunda depresión y además se le habían desarrollado otras enfermedades con motivo u ocasión de la pena o angustia y que incluso, producto de esta lamentable situación tenía que hacerse cargo de su hija actualmente la que, si bien es mayor de edad, aún no puede superar el trauma de haber visto a su hermano fallecido. Recordemos que para esta familia el hallazgo del cadáver fue una cuestión impactante, habida consideración que al recibir noticias del posible deceso de su hijo la víctima junto con su hija concurre al inmueble y al momento de ingresar encuentran al cuerpo inerte de la víctima en posición cúbito dorsal con varios impactos de bala en su cuerpo. Ahora bien la pena y el dolor fue una cuestión evidente en la narrativa o relato de la testigo la que en reiterados pasajes se advertía emoción en su timbre de voz, se le quebraba la voz producto de la emoción, rompiendo en otras secuencias de su declaración en llanto al evocar un episodio traumático, cuestiones todas que hacen entender de manera racional y lógica de la existencia de un perjuicio o daño emocional o moral en la actora, como consecuencia directa de los hechos ocurridos el día 15 de febrero del año 2022...”, todo lo cual resulta en una



consecuencia directa del actuar del sentenciado, extendiendo los nefastos efectos de sus acciones a terceros.

**OCTAVO:** Que en cuanto al delito previsto en la ley 17.798, en primer lugar es dable señalar lo extraño que resulta que por la vía de una alegación subsidiaria se requiera la anulación de la sentencia y la dictación de una de reemplazo con una pena inferior a aquella solicitada al deducir la causal principal, haciendo el recurso confuso, pues respecto de la primera el recurrente solicitó que se le impusiera una temporal de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, lo que resulta del todo contradictorio pues de haberse acogido aquella habría necesariamente que haber desechado la subsidiaria en que se solicitó dictar a una sentencia de reemplazo en que se le impusiera una pena temporal de tres años y un día de presidio menor en su grado mínimo, impresionando entonces el ejercicio del recurso no bajo el convencimiento de la existencia de los yerros que se denuncian, sino que como una estrategia para obtener una rebaja de la globalidad de la pena.

**NOVENO:** Que no obstante lo anterior, tampoco es posible estimar que se ha infringido el principio del *nom bis idem* en la determinación del quantum de la pena que efectuaron los sentenciadores, pues destacaron la mayor extensión del mal causado toda vez que el bien jurídico protegido es el orden público y si bien se trata de una figura de peligro abstracto, no se puede preterir que la conducta desplegada por el acusado implicó un mayor desvalor en la misma, toda vez que éste *“se trasladó por distintas calles de la ciudad portando consigo un arma apta para el disparo, la que por sus características tenía una mayor capacidad de destrucción y letalidad la que podía operar en modalidad automática o semi automática según la adaptación que ella tenía en el disparador del armamento tal como lo mencionaron los testigos del ministerio público y peritos. Por consiguiente, no se trató únicamente del simple acto de tener y portar un arma en un lugar específico y determinado, sino que por el contrario el encartado llevaba consigo el armamento e incluso lo utilizaba con fines de protección para sí y para terceros”*. Es más, los jueces recuerdan *“que el imputado va al encuentro de las personas o de un grupo social dentro de los cuales estaba la víctima el día 14 de*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

febrero de 2022, llevando consigo “su juguete”, es decir, el armamento ya que se le solicitó protección para hacer frente a una banda rival y dado que dicha banda rival no llega al encuentro del acusado y de los terceros se trasladan todos ellos a un departamento ubicado en calle Santiago Arata llevando consigo el arma la que finalmente fue disparada por el acusado impactando a la víctima” y “...amén que el acusado el día 18 de febrero de 2022 es detenido llevando consigo el arma en el interior de un vehículo. Es decir, el encartado con absoluta infracción de las leyes y reglamentos portaba consigo el arma de fuego poniendo en riesgo el orden público, siendo contumaz en la conducta”.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 352, 360, 373 letra b), 375 y 384 del Código Procesal Penal, se declara:

Que **SE RECHAZA el recurso de nulidad** deducido por el Defensor Penal Público Diego Álvarez Trigo, en representación del sentenciado **Diego Hernán Valdés San Martín**, en proceso seguido en su contra **RUC 2300777665-9, RIT 35-2024**, del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de abril del año en curso, que condenó al mencionado acusado, a las penas y por los delitos ya indicados. Consecuentemente, se declara que dicha sentencia no es nula, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Marco A. Flores Leyton.

No firma Ministro, señor Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa, se encuentra con licencia médica.

**Rol N° 379-2024 Penal.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Marco Antonio Flores L. y Abogado Integrante Patricio Javier Ponce C. Arica, veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.

En Arica, a veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXXXPFRLJ